

NADIE DIO NADA A LOS COLONOS

Entre el mito del dictador benéfico
y los intereses de los grandes
terratenientes

ANTONIO CAZORLA SÁNCHEZ

Catedrático de Historia Contemporánea
de Europa, Trent University (Canadá)



La colonización agraria del franquismo se asentó sobre un campo marcado por la violencia y la represión desde 1936, que restituyó una estructura agraria profundamente desigual. En la posguerra, el Instituto Nacional de Colonización se presentó como un proyecto modernizador, pero operó sobre una realidad de explotación, control y miseria, donde muchos campesinos trabajaron endeudados, con escasos ingresos y en un contexto de hambre generalizada.



Se crearon unos 300 pueblos en los que se asentaron a 30.000 familias.

La colonización franquista no inauguró una nueva era de justicia social, sino que culminó la contrarrevolución agraria iniciada en 1936

Hay, básicamente, dos formas de mirar a la historia del proyecto de colonización agraria franquista. Una, la que en su día propagó el régimen y que aún creen muchos españoles, es que la colonización fue el comienzo de una nueva era de progreso y justicia social en el campo español que, bajo la sabia guía de Francisco Franco, por fin encontró un camino para evolucionar libre de las enormes convulsiones del pasado que, a su vez, habían contribuido de forma decisiva al estallido de nuestra guerra civil. La otra visión, que es la que voy a defender en este artículo, es que la colonización, analizada desde una perspectiva de larga duración histórica, representa la culminación -ejecutada lentamente y que apenas cambió nada en la estructura económico-social del agro español- de la contrarrevolución agraria emprendida por los rebeldes en el verano de 1936. Esta, a su vez, supuso el triunfo de los intereses de los grandes terratenientes cuya situación de primacía económica, social y política se había cimentado, a costa de grandes desigualdades materiales y abundante miseria entre la población rural, durante la transición de España del Antiguo Régimen al sistema liberal en el siglo XIX.

Reforma y contrarreforma

Para entender mejor la interpretación que yo defiendo, creo que nada la explica mejor que una foto tomada el 4 de agosto de 1936 en el pueblecito sevillano de Tocina. En esta instantánea aparecen decenas de hombres armados -tropas y milicias rebeldes- entrando en el pueblo. Las lidera el único hombre vestido con un mono blanco, bastón y la cara contorsionada con gesto agresivo, Rafael Medina, duque de Medinaceli, falangista, quien, como otros grandes terratenientes andaluces, se encargaron de, en palabras sacadas de sus memorias, conseguir la «liberación y el dominio» del campo, que en su caso significaba también recuperar sus tierras de los comités de campesinos revolucionarios que se las habían incautado en las semanas previas. Con estas acciones violentas, el duque no sólo conservó su patrimonio, sino que se aseguró de que luego prosperaría y mucho durante el régimen dictatorial: entre otras distinciones y cargos, fue alcalde de Sevilla y procurador a Cortes. Detrás quedaron, olvidados o sólo recordados para ser insultados, las víctimas de las andadas de las mesnadas del duque y de otros como él que sembraron las provincias de Sevi-

lla, Huelva y Cádiz de miles de cadáveres aquel verano. Entre ellos estaba el alcalde, socialista, de uno de los pueblos tomados, que se rindió, vara en mano al señor duque, y que este mismo confesó considerar un buen hombre, pero al que había que... ¿Por qué esta represión intensa, extensa y cruelísima? Pues porque había que acabar con la amenaza social y política que representaba el campesino pobre movilizad. Este se había sentido desilusionado con el ritmo lento de las reformas agrarias llevadas a cabo por la República, y en particular por la Ley de Reforma Agraria de los progresistas de 1932, y, con más motivo, la contrarreforma parcial del Gobierno republicano conservador en 1935. Por eso, poco después de producirse la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, se produjo un movimiento masivo de ocupación de tierras que, sobre todo en el sur de la Península, supuso la toma de unas 900.000 hectáreas por unas 225.000 familias. El momento probablemente más emblemático de este movimiento tuvo lugar en Extremadura el 25 de marzo. La fecha, tras ser enterrada y olvidada con muchos de sus protagonistas durante la dictadura ha vuelto recientemente a ser recordada. El movimiento de ocupación de tierras de la primavera de 1936 fue, en general, un proceso pacífico. Mucho menos pacífico, pues a menudo conllevó la muerte y el maltrato a muchos propietarios, fue la ocupación y socialización de tierras que se desató a partir del golpe militar de julio y el consiguiente estallido de la revolución social en muchos lugares que permanecieron en la zona, que no bajo el control del Gobierno, de la República. Se ha calculado que este proceso afectó, al menos, a otros cinco millones de hectáreas más. La Guerra Civil fue, además de un conflicto horrendo lleno de crímenes por las dos partes, por parte de las tropas franquistas a medida que avanzaban, un proceso de devolución de fincas a sus antiguos dueños (a las que habría que añadir no pocas que

se robaron a los republicanos asesinados, presos, multados o exiliados). Estas devoluciones, en su mayoría, se hicieron a punta de pistola. Para darle una pátina legal y de orden, en 1938, esto es, ya cuando se empezaba a deslumbrar el resultado final de la contienda, el emergente régimen franquista creó el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra (SNREST) dirigido por el falangista Ángel Zorrilla. Este organismo, repetimos, estaba encargado de ordenar, o más bien de dar la apariencia de orden, a la contrarrevolución agraria. Pero, a pesar de toda la dialéctica falangista sobre el problema de la tierra y las soluciones de nuevo cuño que se iban a acometer, como recordaría el propio Zorrilla en sus memorias, ni el SNREST ni ningún otro organismo controlado por los seguidores de José Antonio o de Franco pudo evitar que el Gobierno adoptase o permitiese leyes y actuaciones que atentaban claramente contra los derechos, muchos de ellos asentados en la tradición, más básicos de los estratos más bajo del campesinado. En el caso de los jornaleros, esto se tradujo en una disminución brutal de los salarios cuyo poder adquisitivo llegó a quedar reducido a un tercio del que tuvieron justo antes de la guerra (los salarios agrícolas no recuperarán su nivel real de 1936 hasta 1962). En el caso de aparceros y arrendadores, estos sufrieron una oleada masiva de desalojos que fue particularmente grave, por su extensión y serio deterioro del nivel de vida de los afectados, entre los yunteros extremeños, y que incluso afectó a los miles de estos que estaban en esos momentos luchando, después de haber sido reclutados, en los ejércitos de Franco. Estos desahucios de los veteranos del bando franquista continuaron después del final de la guerra. Según un informe reservado de la propia Falange de Cáceres de 1957, en la provincia se habían expulsado durante y después de la guerra a 20.000 familias de las tierras que hasta ese momento trabajaban como yunteros o arrendadores.



Franco durante una visita a uno de los pueblos de la colonización.



La dieta del obrero andaluz llegó a ser considerada suficiente en calorías para el esfuerzo físico intenso.

Instituto Nacional de Colonización

Acabado el conflicto, el régimen disolvió el SNREST. En su lugar, para gestionar el legado de lo poco que quedaba de las reformas agrarias previas, incluyendo a las anteriores a la República, pero también para acometer la prometida reforma ordenada, eficaz y asesorada técnicamente que prometía la propaganda del régimen, este creó el Instituto Nacional de Colonización (INC). Su primer presidente no fue otro que el mismo Ángel Zorrilla, subrayando de esta manera el vínculo entre la recién concluida contrarreforma agraria (y la violencia que la acompañó) y la colonización. Sin embargo, el proceso de desposeer a los campesinos siempre lo acometería el régimen con más fruición que asentarlos. Si, como vimos hace un momento, los que fueron echados de las tierras que labraban en Cáceres en la posguerra llegaban a las dos decenas de miles, los que instaló el franquismo como colonos en toda España a través del INC entre 1939 y 1951 apenas fueron, según los muy optimistas y seguramente inflados datos del propio instituto, 16.074 familias.

En resumen, el régimen quitó la tierra a centenares de miles de familias para asentar luego, en medio de autoelogios, loas al dictador y mucha palabrería, a una nimia frac-

Los jornaleros perdieron salario, poder adquisitivo y condiciones de vida

ción de aquéllos, a los que, como veremos pronto, para colmo no dio nada, ya que la tierra y las casas que recibieron fueron pagadas por los colonos al Estado con interés y después de sufrir penalidades que son impensables y seguramente serían intolerables hoy. Otra historia muy distinta fue cómo el régimen trató a los grandes terratenientes afectados por los planes de colonización.

Hambre y esperanza

No es este el lugar para analizar por qué hubo tanta hambre en la España de posguerra hasta el punto de matar a, quizás, unos 200.000 españoles. Digamos simplemente que se cebó sobre todo en el sur, entre los campesinos sin tierra, y el proletariado de las ciudades. Añadamos también que esta hambre no se debió a la falta de alimentos, sino a que estos no llegaron a los más pobres a los que el Estado franquista, tan efi-

caz a la hora de reprimir, no pudo o quiso salvar. Por ejemplo, en 1941 y 1942, los peores de la hambruna, los presupuestos del Estado tuvieron un superávit primario de cerca del 10%. Ese dinero podía haberse dedicado a alimentar a la población más necesitada, como lo podría haber hecho los miles de millones que se dedicaron en los años siguientes en rescatar, a precios sobrevalorados, las acciones que tenían los bancos en las arruinadas compañías de ferrocarriles para crear la RENFE. Digamos simplemente que, aún si la contrarreforma franquista había hecho de nuevo jornaleros a decenas de miles de pequeños arrendadores y aparceros, al menos una política de salarios de supervivencia podría haber evitado la catástrofe. Pero es evidente que esto no fue así. No es que el franquismo no hiciese nada: en vez de cambiar la realidad, el régimen decidió maquillarla. Enseguida ponemos un ejemplo de esto.

Colonización era un suplemento de la revista *Agricultura*, la publicación periódica oficial del ministerio de dicho nombre. En 1948, dos supuestos expertos, uno de los cuales era médico, publicaron allí un artículo explicando con sesudos argumentos y muchos datos lo bien alimentados que estaban los jornaleros andaluces. La humanidad no sale bien parada del mismo ya que, como pieza de cinismo, no tiene desperdicio:

«Refiriéndonos concretamente al obrero andaluz, de proverbial sobriedad, el patrono le facilita pan, aceite y grasas animales, poniendo de su parte el obrero muy poco más, e incluso mermando la ración que en los actuales momentos se le da en beneficio de sus familiares [...] llegamos a la conclusión de que el número de calorías suministradas al obrero está en exceso con respecto a las que hemos considerado como promedio al cabo del año, ya que prácticamente se alcanzan las 4.000 necesarias para los días de grandes esfuerzos musculares. [...] En este sentido podemos, pues, considerar la dieta como completa».

Esto es, los jornaleros estaban tan bien alimentados, gracias a la generosidad sin límites de sus patronos, que hasta podían llevarse buenas sobras a casa, además de su salario, claro. Lástima que un informe de la Acción Católica de Sevilla de 1953 arruina- se algo el cuento. Este decía, a mi juicio de

manera harto optimista, que los jornaleros estaban viviendo con un salario medio cuyo poder adquisitivo era la mitad del que tenían en 1936 ya que sus ingresos semanales eran, contando los días de paro, de apenas 40 pesetas, cuando una familia necesitaba 200 para sobrevivir. La desnutrición resultante daba lugar a la senilidad precoz entre los adultos y el subdesarrollo de los niños, y a que la productividad de los trabajadores fuese entre un 20 % y un 25 % de la que hubo durante los «peores y más anárquicos años de la República». A lo mejor resulta que los malvados jornaleros, todos estos años de feliz gobierno del caudillo, en vez de llevarse a casa la comida que les sobraba, la tiraban por ahí. Nunca se sabe con los pobres.

Precisamente porque los pobres eran sus peores enemigos, el proyecto de colonización excluyó a los más pobres entre aquéllos. Como decían los teóricos del INC, colono iba a ser no quien quisiera sino quien pudiera. Por eso los jornaleros se vieron normalmente excluidos de los seleccionados para ser colonos, ya que el instituto prefería pequeños agricultores, aparceros y obreros agrícolas hijos. También excluyó a personas con un pasado «rojo» o consideradas inmorales. Si podía elegir, el INC prefería a campesinos que ya poseían el 20 % del capital de lo que se estimaba costaba la casa y la parcela que iban a recibir. Estos pasaban

así directamente a la fase de «acceso a la propiedad». A los que no tenían esa cantidad, la mayoría, se les metía primero en otra categoría, llamada de «tutela», que en teoría debería durar cinco años pero que en la práctica fue a menudo más larga, en la que el colono vivía en régimen de aparcería con el INC, al que debía entregar el 50 % de su cosecha, más el pago del coste de los insumos recibidos.

Como quiera que las cosechas, gracias a que las tierras que recibían solían estar mal volteadas, con la tierra mala encima y llenas de piedras, y que lo que se plantaba era lo que mandaba el muy autoritario INC, y este se equivocaba, pero no admitía enmienda, a menudo las familias tuteladas vivían muchos años sin nada de dinero en sus bolsillos en condiciones terribles. Estas se acentuaban porque a veces llegaban a los pueblos y estos no estaban hechos, teniendo que alojarse en barracones, chozas y hasta corrales. Si estaban hechos, no estaban terminados, pues las casas con frecuencia no tenían puertas y ventanas y casi nunca agua corriente o electricidad, que podían tardar varios años en estar disponibles.

Entre la pobreza de las cosechas, la falta de dinero, el aislamiento, las difíciles condiciones de habitabilidad y, no es menos, el control férreo que ejercían los empleados del INC (empezando por la autoridad suprema,

La hambruna de posguerra fue consecuencia de decisiones políticas, no de escasez

Niños pidiendo. Los ingresos semanales eran de apenas 40 pesetas, cuando una familia necesitaba 200 para sobrevivir.





Entrerriós (Badajoz) con sus primeros pobladores en 1956.

Había que acabar con la amenaza social y política que representaba el campesino pobre movilizado

el temido ingeniero de zona, siguiendo por sus peritos y los más cercanos mayores y guardas) no es de extrañar que el índice de abandono entre los colonos fuese muy alto, llegando en varias zonas a rondar el 50 %. Esto es especialmente cierto en los años sesenta cuando la disyuntiva entre esperar años a que la casa estuviese terminada y la parcela dando beneficios o irse a trabajar a una gran ciudad o a Europa y empezar a disfrutar de una mejora instantánea de las condiciones de vida, en teoría al menos, claramente inclinaba la balanza en favor de la segunda opción.

¿Dar o quitar?

La dura realidad diaria de los colonos, sobre todo en los primeros años de asentamiento, fue ignorada de forma sistemática por la propaganda franquista. Para esta, todo el proyecto no era sino una realización magnífica de las promesas del amadísimo redentor caudillo, siempre preocupado él, hasta el punto de ser incapaz de conciliar

el sueño, por la suerte del campesinado español. La prensa y los noticiarios del No-Do transmitían al público las historias de Franco recorriendo proyectos hidráulicos y de colonización, repartiendo títulos de propiedad y, por supuesto, siendo aclamado por las masas.

Leídas hoy (No-Do nunca emitía la voz de los protagonistas de sus historias) sus palabras aparecen banales y llenas de lugares comunes, y a veces simplemente extrañas, pero en su momento, en un país traumatizado por la reciente Guerra Civil y atenazado por la miseria de la larguísima postguerra, sonaban a muchos proféticas y llenas de esperanza. Y además Franco jugaba bien el papel de gobernante bienintencionado que venía a lugares abandonados de la justicia de los hombres para «saber de vuestros problemas». Es decir, que mucha gente que sabía que las autoridades locales eran con frecuencia corruptas e inútiles, porque lo veían y sufrían cotidianamente, podía pensar que todo lo malo pasaba porque Franco no sabía nada, que lo tenían engañado los sicofantes que le rodeaban.

Estamos ante una reedición del mito viejo del buen rey y el mal gobierno del Antiguo Régimen, que muchos españoles creyeron hasta el final de la dictadura cuando por fin la prensa se hizo libre y empezó a fiscalizar a nuestras élites políticas. En todo caso, la figura de Franco como el satisfecho inaugurador de obras públicas tardó al menos una década en ser creada, y acabó bastante antes de su muerte. Las imágenes que creemos recordar de estos eventos, que a veces se piensan que son de toda la dictadura, son en realidad su mayoría en de los años cincuenta y la primera mitad de los sesenta. En la segunda mitad de esa década, el caudillo bajó mucho su actividad pública.

¿Y qué había detrás de tanta alabanza autobombo del dictador? Según la propaganda del régimen, el franquismo asentó en total a 53.572 familias colonas, con una media de 1.292 familias por año, 561 en regadío y 731 en secano. En realidad, fueron menos, pues se incluyó a colonos de periodos pasados. En todo caso, se crearon unos 300 poblados en los que se asentó a 30.000

La violencia de la guerra sirvió para devolver la tierra a los grandes propietarios



Columnas de la muerte. Llerena (Badajoz).

familias. La mayoría de las familias recibió de media unas 3 hectáreas de regadío o 7 de secano; pero el 21.6 % de los colonos no recibió parcelas: eran obreros agrícolas con derecho a una casa más pequeña y un huerto de media hectárea. Esta proporción de colonos-jornaleros fue muy alta en áreas del Valle del Guadalquivir y en Jaén, hasta superar el 40 %, curiosamente las zonas en las que dominaba la gran propiedad que necesitaba brazos en épocas puntuales de cosechas. Esto ya nos da una pista de quienes fueron los verdaderos beneficiarios del proyecto colonizador franquista. Pues de cerca del millón de hectáreas transformadas en regadío por el INC, sólo el 26,2 % fue a los colonos que, como ya he dicho, pagaron por todo lo que recibieron y con interés (normalmente entre el 4 y el 6 %). Por el contrario,

los grandes terratenientes sí que recibieron enormes inyecciones de capital del Estado en unas condiciones muy ventajosas y con beneficios llovidos del cielo. El mecanismo funcionaba como sigue. Cuando el INC quería colonizar una zona, la declaraba de interés y se acercaba a los terratenientes para «expropiarlos». En realidad, esto significaba que la mayoría de la superficie de las fincas, las mejores tierras, iban a quedar en manos del gran propietario, pero, a cambio de las que cedía, el INC iba a introducir en ellas el regadío. Esto significaba simplemente que el valor de la propiedad del gran terrateniente se multiplicaba por entre cuatro y diez veces y, puesto que lo que le había «quitado» el INC era apenas de media un cuarto de la tierra original, su patrimonio se multiplicaba fácilmente por entre un 300 % y un 750 %, y sin riesgo alguno.



En provincias como Cáceres durante y después de la guerra a 20.000 familias de las tierras que trabajaban como yunteros o arrendadores.

Los colonos pagaron con intereses la tierra y las casas que recibieron

Como acabamos de ver, los verdaderos beneficiarios de la colonización no fueron los colonos, sino los latifundistas. La colonización tampoco acabó con la pobreza rural, ni transformó significativamente la estructura del agro español. Lo que sí cambió el campo fue, por un lado, la modernización y mecanización, y, por otro, la emigración masiva de millones de personas hacia las ciudades y Europa. Estos, privados del derecho a objetar y cambiar el gobierno de Franco, votaron con sus pies. Como ya escribí el pionero de los estudios sobre la colonización, Nicolás Ortega:

«[...] después de treinta y seis años, la política de colonización del 'Nuevo Estado' había conseguido un total de asentamientos -incluyendo, por cierto, los procedentes de actuaciones anteriores a la Guerra Civil y que pasaron a depender del Instituto- que equivalía al 27,9 % de los llevados a cabo, en tiempos de la Segunda República, durante los cuatro meses posteriores a las elecciones de febrero de 1936».

Y de eso se trataba. No de dar nada a los campesinos, sino de quitarles lo que habían conseguido o podrían haber conseguido si los militares no hubiesen tomado las armas contra el Gobierno constitucional del país en julio de 1936.